**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de la educación para todos los estudiantes en condición de discapacidad, eliminando las barreras que les impiden participar en condiciones de igualdad en el ámbito educativo.

**ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** Las disposiciones contenidas en la presente Ley aplican en todo el territorio nacional a las personas en condición de discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación Nacional, entidades territoriales certificadas, establecimientos educativos, ya sean de carácter público o privado.

Igualmente, aplica a las entidades del sector educativo del orden nacional como: Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Instituto Nacional para Sordos (INSOR), y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación(ICFES). Se aplicarán en todo el territorio nacional.

**ARTÍCULO 3. Modifíquese el Articulo 2.3.3.5.2.3.1., literal a. del decreto 1421 de 2017 el cual quedara así:**

**Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión escolar**. Para garantizar una educación inclusiva y de calidad, y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación deberán gestionar procesos que cualifiquen la oferta educativa.

De acuerdo con lo anterior y con base en la gestión educativa territorial, los establecimientos educativos deberán adelantar procesos de gestión escolar.

Para cumplir con los anteriores propósitos, se establecen las siguientes responsabilidades para el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos educativos, tanto públicos como privados:

a) Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional:

1. Dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la educación inclusiva en los diferentes niveles educativos, de acuerdo con las características propias y necesidades de cada diagnostico y/o discapacidad que permitan implementar enfoques pedagógicos diferenciales para cada uno de estos grupos.

2. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en educación para la atención de personas de acuerdo a cada con discapacidad y para la elaboración de los planes de implementación progresiva de lo dispuesto en la presente sección, para lo cual coordinará su gestión con el Instituto nacional para ciegos INCI, el Instituto nacional para sordos Insor y las organizaciones idóneas en el tra­bajo con personas con discapacidad.

3. Hacer seguimiento a la ejecución de las estrategias de atención a estudiantes con discapacidad que definan las entidades territoriales certificadas en educación y diseñar y hacer seguimiento a los indicadores que den cuenta de la educación inclusiva de la población con discapacidad en los diferentes niveles educativos.

4. Articular las diferentes áreas y proyectos del Ministerio de educación Nacional, incluyendo a la población con discapacidad, para elaborar la oferta de una edu­cación de calidad a las personas con discapacidad.

5. Brindar asistencia técnica a los equipos de las secretarías de educación, o entida­des que hagan sus veces, en la implementación de los lineamientos, capacitación, programas y rutas para la aten­ción a personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.

6. Acompañar a la entidad territorial en los ajustes de la estrategia de atención cuan­do los resultados obtenidos en el desarrollo de la misma así lo ameriten.

7. Articular como sector educativo, con sus entidades adscritas, la generación de planes, programas, proyectos e indicadores para la educación inclusiva de las per­sonas con discapacidad y pedir la asesoría de organizaciones que las representen sobre estos aspectos, tanto para estudiantes en edad regular como para jóvenes en extra edad y adultos, en los diversos niveles educativos

8. Consolidar con el Instituto nacional para sordos Insor la oferta de Modalidad Bilingüe - Bicultural para estudian­tes con discapacidad auditiva y la organización y calidad de la prestación de los servicios de apoyo necesarios para esta modalidad.

9. Coordinar con el Instituto nacional para ciegos INCI la producción, dotación y distribución de material didácti­co en braille, macro tipos, relieve y productos especializados en los establecimien­tos educativos oficiales de preescolar, básica y media, que atiendan personas con discapacidad visual y sordoceguera.

10. Consultar con organizaciones idóneas en el trabajo con personas con discapacidad para la cualificación de la atención educativa en la oferta general para que todos los establecimientos educativos sean inclusivos.

11. Diseñar, adaptar y desarrollar, en coordinación con el Ministerio de las Tecnolo­gías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto nacional para ciegos INCI y el Instituto nacional para sordos Insor y demás instituciones que representen la población con discapacidad, aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de barreras que dificul­tan los procesos de acceso al conocimiento y a la información a las personas con discapacidad y aportar soluciones dentro de los ajustes razonables a través de las TIC.

12. Promover y desarrollar, en conjunto con las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional, procesos de investigación e innovación en metodologías, ayudas técnicas, pedagógicas y didácticas que mejoren el desempeño escolar de los estudiantes con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental y múltiple.

**ARTÍCULO 4. Modifíquese el Articulo 2.3.3.5.1.1.4., literal 9, del decreto 1075 de 2015 el cual quedara así:**

**Artículo 2.3.3.5.1.1.4. Responsabilidades de las entidades territoriales certificadas**. Cada entidad territorial certificada, a través de la secretaría de educación, organizará la oferta para la población con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, para lo cual debe:

9. Comunicar al Ministerio de Educación Nacional el número de establecimientos

educativos con matrícula de población con discapacidad y población con capacidades o con talentos excepcionales, con dos fines: a) ubicar en dichos establecimientos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos, y b) desarrollar en dichos establecimientos programas de sensibilización de la comunidad escolar y de formación de docentes en el manejo de metodologías y didácticas flexibles para la inclusión de estas poblaciones, articulados a los planes de mejoramiento institucional y al plan territorial de capacitación. Promover un centro integral que gestiones los recursos evitando su dispersión para garantizar una atención integral y efectiva.

**ARTÍCULO 5. Modifíquese el Articulo 2.3.3.5.1.3.3., del decreto 1075 de 2015 el cual quedara así:**

**Artículo 2.3.3.5.1.3.3 Aulas de apoyo especializadas**. Las aulas de apoyo especializadas se conciben como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar los soportes indicados en el inciso 3 del artículo 2.3.3.5.1.1.5. de este Decreto que permitan la atención integral de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

Para integrar el componente humano de dichas aulas, las instituciones educativas podrán conformar equipos colaborativos o semejantes, integrados por docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa que contarán con la asesoría de organismos y profesionales competentes para atender las discapacidades o las excepcionalidades.

El Gobierno nacional apoyará financieramente a las entidades territoriales para el establecimiento de las aulas de apoyo especializadas definidas en el plan gradual regulado en los artículos 2.3.3.5.1.3.1. y 2.3.3.5.1.3.2. de este Decreto, directamente o a través del sistema de cofinanciación, de acuerdo con los procedimientos, mecanismos y condiciones definidos por la Junta Directiva del Fondo de Inversión Social, FIS.

Los recursos destinados a estas aulas se deben focalizar en un número mínimo de instituciones públicas y privadas por municipio, cumpliendo con los lineamientos del ente territorial.

**ARTÍCULO 6. Modifíquese el Articulo 2.3.3.5.1.3.11., del decreto 1075 de 2015 el cual quedara así:**

**Artículo 2.3.3.5.1.3.11. Organización de la oferta**. La entidad territorial certificada organizará la oferta de acuerdo con la condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional que requiera servicio educativo y asignará el personal de apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que presenten los estudiantes matriculados. Para ello, la entidad territorial certificada definirá el perfil requerido y el número de personas teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. Por lo menos una (1) persona de apoyo pedagógico por establecimiento educativo que reporte matrícula de mínimo diez (10) y hasta cincuenta (50) estudiantes con discapacidad cognitiva (Síndrome Down u otras condiciones que generen discapacidad intelectual) con Síndrome de Asperger, autismo, discapacidad motora o con capacidades o con talentos excepcionales.

2. Un (1) modelo lingüístico y cultural por establecimiento educativo que reporte matrícula de mínimo diez (10) y hasta veinticinco (25) estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas colombiana, en preescolar, básica y media.

3. Un (1) intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula de mínimo diez (10) estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas en los niveles de básica secundaria y media.

4. Cuando la matrícula de estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales por institución sea menor de diez (10), la entidad territorial certificada asignará por lo menos una (1) persona de apoyo pedagógico itinerante para aquellos establecimientos educativos ubicados en zonas urbanas y rurales de dicho municipio. En este caso, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada podrá además de flexibilizar el parámetro de acuerdo con las condiciones de cada contexto, desarrollar programas en convenio intermunicipal, ofrecer formación sobre educación inclusiva a los docentes de grado y de área y vincular a las instituciones de educación superior y a las familias, entre otros.

5. Una (1) persona de apoyo pedagógico por cada estudiante con sordoceguera.

Parágrafo 1°. Exclusivamente en el caso de población con discapacidad cognitiva (Síndrome Down y otras condiciones que generen discapacidad intelectual, Síndrome de Asperger y autismo), el porcentaje máximo de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior al diez por ciento (10%) del total de estudiantes de cada grupo.

Parágrafo 2°. Para el caso de los estudiantes con discapacidad sensorial o con discapacidad motora, el porcentaje de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser superior al 20% del total de matriculados en cada grupo.

6. Se asignará al menos (1) profesional de apoyo pedagógico por cada tres estudiantes con discapacidad intelectual o física. Este acompañamiento será asignado para los casos que el estudiante así lo requiera previo diagnóstico de soporte médico y pedagógico. En casos de carencia de profesionales de apoyo pedagógico podrá ser suplido por profesionales, estudiantes pasantes de carreras afines.

**ARTÍCULO 7. Modifíquese el Articulo 2.3.3.5.1.6.3., del decreto 1075 de 2015 el cual quedara así:**

**Artículo 2.3.3.5.1.6.3. Complementariedad de las acciones de las entidades territoriales certificadas en educación**. El Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas y las secretarías de educación de las entidades territoriales, de manera coordinada y bajo sistemas de cofinanciación, podrán definir mecanismos que permitan planificar y gestionar programas y proyectos, dentro de sus respectivas competencias, para atender el servicio educativo de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, contando con una caracterización detallada de esta población y asegurando que la base de datos se actualice anualmente con información vigente y precisa.

**Artículo 8. REGLAMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.** En un término no mayor a 1 año contados a partir de la promulgación de la presente Ley el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad o quien haga sus veces, reglamentará todo lo dispuesto en la presente Ley.

**PARÁGRAFO.** El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará la apropiación de las partidas presupuestales necesarias para el funcionamiento del Programa de Asistencia Personal en las respectivas leyes de Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto General de la Nación

**ARTÍCULO 9. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN.** El Sistema Nacional de Discapacidad será el encargado del seguimiento a la implementación de las disposiciones contenidas en la presente Ley.

**ARTÍCULO 10. VIGENCIA Y DEROGATORIA.** La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contraria

Gerardo Yepes Caro

Representante a la Cámara.

PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.”

**2. Contenido del Proyecto**.

1. Articulado.
2. Contenido del Proyecto.
3. Exposición de Motivos.
4. Objeto.
5. Principios.
6. Definiciones.
7. Contexto.
8. Justificación.
   1. Antecedentes históricos.
   2. Modelos de discapacidad en Colombia.
   3. Presente de la educación especial en Colombia.
   4. Estadísticas de población con discapacidad en Colombia.
   5. Programas actuales de educación especial en Colombia.
9. Marco legal.
   1. instrumentos jurídicos internacionales.
   2. Fuentes constitucionales.
10. Impacto fiscal.
11. Conflicto de interés.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

## OBJETO

Este proyecto de Ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de la educación en condiciones de igualdad para todos los estudiantes en condición de discapacidad, en especial para aquellos que debido a su condición requieren compañía permanente durante el proceso educativo eliminando las barreras que les impiden participar en condiciones de igualdad en el ámbito educativo. Esta iniciativa legislativa debe provisionar herramientas y recursos necesarios para que los estudiantes en condición de discapacidad puedan acceder realmente al sistema educativo, disminuyendo las desigualdades existentes, e impulsando la enseñanza pública y privada, para que atienda de mejor forma los requerimientos educacionales de este grupo poblacional.

Para la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional implementará las medidas necesarias y contempladas en la presente ley.

**5. PRINCIPIOS.** Los principios aplicables al presente proyecto de Ley son:

1. **Autonomía:** facultad de la persona que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.
2. **Solidaridad:** apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles.
3. **Respeto:** es el reconocimiento, consideración, atención o deferencia que se debe a las personas.
4. **Reconocimiento:** acción de distinguir a una persona entre las demás. Dicho reconocimiento se logra a partir del análisis de las características propias de la persona.
5. **Visibilización:** hacer evidente la diversidad humana y el contexto de las personas en condición de discapacidad desde lo que no puede verse a simple vista.
6. **Universalidad:** garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.
7. **Progresividad:** Avance e incremento gradual del reconocimiento de derechos de que trata la presente Ley de manera expedita y eficaz para personas discapacidad y sus cuidadores familiares, cuyo fin último es alcanzar la universalidad.
8. **Protección social:** Garantía de políticas y acciones en diversos temas con el fin de promover el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el mundo del trabajo, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la pensión y el cuidado, así como el derecho a un nivel digno de ingreso, de las personas con discapacidad y sus cuidadores familiares.
9. **Acceso a la educación para las personas con discapacidad**: proceso que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas en condición de discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.
10. **No discriminación*.*** Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su discapacidad. Cualquier proceso de admisión aportará a la caracterización pedagógica y a la construcción del PIAR. Así mismo, no podrá ser razón para su expulsión o no continuidad en el proceso educativo en el establecimiento.

**6. DEFINICIONES.** Las definiciones aplicables a la presente proyecto de Ley son:

1. **Discapacidad:** deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir la participación plena y efectiva de las personas que poseen estas deficiencias en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
2. **Personas en condición de discapacidad:** Aquellas personas que tengan condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
3. **Autonomía:** Derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia.
4. **Profesional de apoyo pedagógico:** son los docentes que tienen como función principal, acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, para lo cual deberán: fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Ajustes Razonables – PIAR y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional –PMI-; la consolidación y refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de Competencias; el trabajo con familias; la sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la atención pertinente a esta población.
5. **Apoyos diferenciales:** son las acciones encaminadas a brindar al estudiante en condición de discapacidad, de las necesidades particulares requeridas para aprender y participar en el medio escolar, en condiciones de equidad, partiendo de la planeación centrada en la persona, en su contexto familiar y social.
6. **Currículo flexible**: es una respuesta educativa diversificada, para definir planes de estudios pertinentes a la realidad y necesidades de sus estudiantes, tratando de dar a todos, la oportunidad de aprender y participar, así como para adoptar decisiones relacionadas con las herramientas didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la promoción, el egreso y la titulación.
7. **Diseño Universal del Aprendizaje (DUA):** comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes, ayudando a reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades.
8. **Planes Individuales de acuerdo con los ajustes razonables (PIAR):** herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas en condición de discapacidad, basados en la caracterización pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos para el estudiante, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento institucional- PMI.

## CONTEXTO

La presente iniciativa legislativa es fruto de un trabajo de articulación legislativa con diversas organizaciones de personas con discapacidad, así como con familiares, reunidos en una red denominada “Síndrome Contenta Tolima “; quienes entienden la necesidad de construir una iniciativa legislativa para avanzar en la superación de las barreras del ejercicio educativo de las personas con discapacidad.

1. **JUSTIFICACION.**

**8.1 Antecedentes históricos**

La adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPDP), en adelante la Convención, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) generó un importante impacto sobre la legislación colombiana, con respecto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la Convención promueve una nueva manera de asumir la discapacidad, enfocada en la protección y garantía de los derechos de la población en condición de discapacidad. Colombia ratificó la Convención en 2011 y, el tratado de derechos humanos, el modelo social de la discapacidad se incorporado dentro del bloque de constitucionalidad.

## 8.2 Modelos de discapacidad en Colombia

Abordamos la discapacidad en Colombia, haciendo referencia a los modelos históricos que lo han direccionado. El primer modelo, es el modelo de la prescindencia que parte de la justificación religiosa de la discapacidad, vista como un castigo o maldición y que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la comunidad, es decir es improductiva, no aporta a la sociedad y es una carga para la familia y la comunidad. Por ello, el abordaje con frecuencia es el de la institucionalización y negación absoluta de ciudadanía.

El segundo modelo se denomina médico-rehabilitador el cual ve la discapacidad como un tema de salud o enfermedad. En este modelo las personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas.

Se aborda la discapacidad desde la segregación, en esa medida, las personas en condición de discapacidad no tienen la posibilidad de tomar decisiones, por ello se aborda mediante mecanismos de sustitución de la voluntad como la interdicción.

Los estándares internacionales de derechos humanos ubican a la persona en condición de discapacidad desde la perspectiva del modelo social, él se plasma en la Convención, y se basa en dos presupuestos fundamentales:

Primero, afirma que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, si no sociales, es decir, son las barreras sociales las que no permiten a las personas diversas, acceder y disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad.

Segundo, se considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia. Los modelos de prescindencia y rehabilitador siguen coexistiendo en la actualidad debido a la lentitud en el cambio cultural.

**8.3 Presente de la educación para población con discapacidad en Colombia.**

Colombia no cuenta con una política pública específica aplicada para la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2018). Lo anterior, imposibilita la garantía de condiciones de equidad, en la medida en que no se reconoce de manera particular ninguna problemática, ni se plantean estrategias para la efectiva inclusión educativa. Lo anterior conlleva a que en Colombia, no se identifiquen niños con problemas de aprendizaje, y en muchos casos no sean diagnosticados correctamente. Las dificultades de aprendizaje son entendidos como “alteraciones especificas en el aprendizaje escolar que emergen puntualmente cuando deben adquirirse ciertos conocimientos académicos altamente específicos, como la lectoescritura o la matemática, o procesos cognitivos relacionados con relacionamiento matemático, decodificación fonológica, generación e inferencias ante distintivos tipo de texto, entre otros, y la dificultad para prestar atención” (MEN, 2018b).

El Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) no cuenta con el registro actualizado de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Debido a lo anterior, una vez identificados los estudiantes que no cumplen con los estándares educativos, son reportados por los rectores de los establecimientos educativos al SIMAT en la categoría de “otras”. Lo anterior, hace imposible contar con cifras precisas de la cantidad de niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje, dificultando dimensionar y formular estrategias efectivas y eficientes. Por tanto, es prioritario conocer el número y características de niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje, con el fin de tener lineamentos para implementar una política pública en concordancia con las realidades de cada individuo, entorno y territorio.

Dentro de la normativa colombiana no existe una estructura que atienda las necesidades especiales para los estudiantes con discapacidad. Especialmente para aquellos que por su condición y diagnostico requieren un apoyo pedagógico permanente para normalizar el proceso educativo determina do así una exclusión del derecho a la garantía educativa.

Cabe anotar, que de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1618 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1421 de 2017, el cual estableció el marco legal para la atención educativa que deben recibir los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, pues es claro que la atención diferenciada o inclusiva en el sector de la educación es un derecho y en la garantía de éste debe reconocerse y dar respuesta pertinente a los diferentes estilos y ritmos de la enseñanza-aprendizaje, como ocurre con los estudiantes que presentan dificultad de aprendizaje. Sin embargo, éste Decreto no define e incluye en sus dimensiones las dificultades de aprendizaje por lo que lo integra dentro de la misma categoría de discapacidad, en la que se encuentra la discapacidad física, psíquica, sensorial[[1]](#footnote-1). Lo anterior no permite priorizar en la atención para niños con dificultades en el aprendizaje.

Es preciso mencionar, que los estudiantes con dificultades de aprendizaje no responden a los métodos de enseñanza tradicional. Sin embargo, se ha demostrado que aprenden con otros métodos y a otros ritmos (Guzmán, 2017). Es así que Acevedo (2003:1) asegura que “las dificultades de aprendizaje implican una debilidad leve, moderada o severa en un área cognoscitiva que puede entorpecer el aprendizaje normal escolar”. Un niño con dificultades de aprendizaje suele tener una inteligencia normal, o superior a lo normal (Acevedo, 2003:1). Su tratamiento debe ser diferenciado al de un estudiante con discapacidad visual o auditiva (entre otros), ya que en muchos casos no requiere de la intervención de un profesional de la salud.

Ceril (2003:1) identifica que “los problemas de aprendizaje se clasifican en dificultades generales de aprendizaje y dificultades específicas de aprendizaje”. En primer lugar, en cuanto a las dificultades generales de aprendizaje se establece que el proceso de aprendizaje se manifiesta a partir de desinterés, deficiencia en la atención y concentración, las cuales pueden presentarse en niños con un desarrollo normal y/o con inmadurez en el área cognitiva o verbal.

Dentro de ésta categoría hay alumnos con aprendizaje lento, los cuales “presentan problemas para seguir un ritmo de aprendizaje normal, caracterizado por deficiencia en la retención de información, menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y problemas para evocar y recuperar la información aprendida” (López, 2004). Estos serían niños, niñas o adolescentes que no estarían en la categoría de discapacidad, retardo mental, ni tampoco presentarían autismo (TEA) Este grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo de aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros (López, 2004). Además, se presenta falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias estrategias para estudiar y memorizar (López, 2004). Desde el ámbito familiar, se asegura que son niños que presentan dificultades en la realización autónoma de tareas y la existencia de bajas expectativas de los padres con respecto a sus hijos (Valdés, et al., 2009).

En segundo lugar, se identifica estudiantes con trastorno específico de aprendizaje. Este se manifiesta en niños con inteligencia normal, no obstante carecen de alteraciones sensomotoras o emocionales, presentando dificultades reiteradas en ciertas áreas del aprendizaje –funcionan bien en algunas áreas, mientras que en otras no- imposibilitando un rendimiento escolar normal (García, 2004). Lo anterior, pueden deberse a alteraciones en el desarrollo, y a la maduración psíquica y neurológica. Un ejemplo de lo anterior, puede ser un menor desarrollo en comprensión matemática por alteraciones en los procesos de clasificación y seriación (Artuso, 2013). Como bien se expuso anteriormente, el MEN (2018b) identifica que las dificultades de aprendizaje se traducen en alteraciones específicas en el aprendizaje escolar que emergen puntualmente cuando deben adquirirse ciertos conocimientos académicos específicos, o procesos cognitivos relacionados con algún tipo de racionamiento puntual.

En este orden de ideas, en muchos casos la identificación y tratamiento de niños con dificultades de aprendizaje debe abordarse dentro del ámbito de la educación común, dado que “la dificultad para aprender no es severa para ingresar a escuelas especiales, ni tan específica para ser rehabilitado” (Ceril, 2003:1). Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar, lo cual permita mejorar los problemas que se presenten en los diferentes niveles de aprendizaje, tales como la recepción, comprensión, retención, creatividad en relación a la edad mental y ausencia de alteraciones sensoriales (Bellefeuille, 2006).

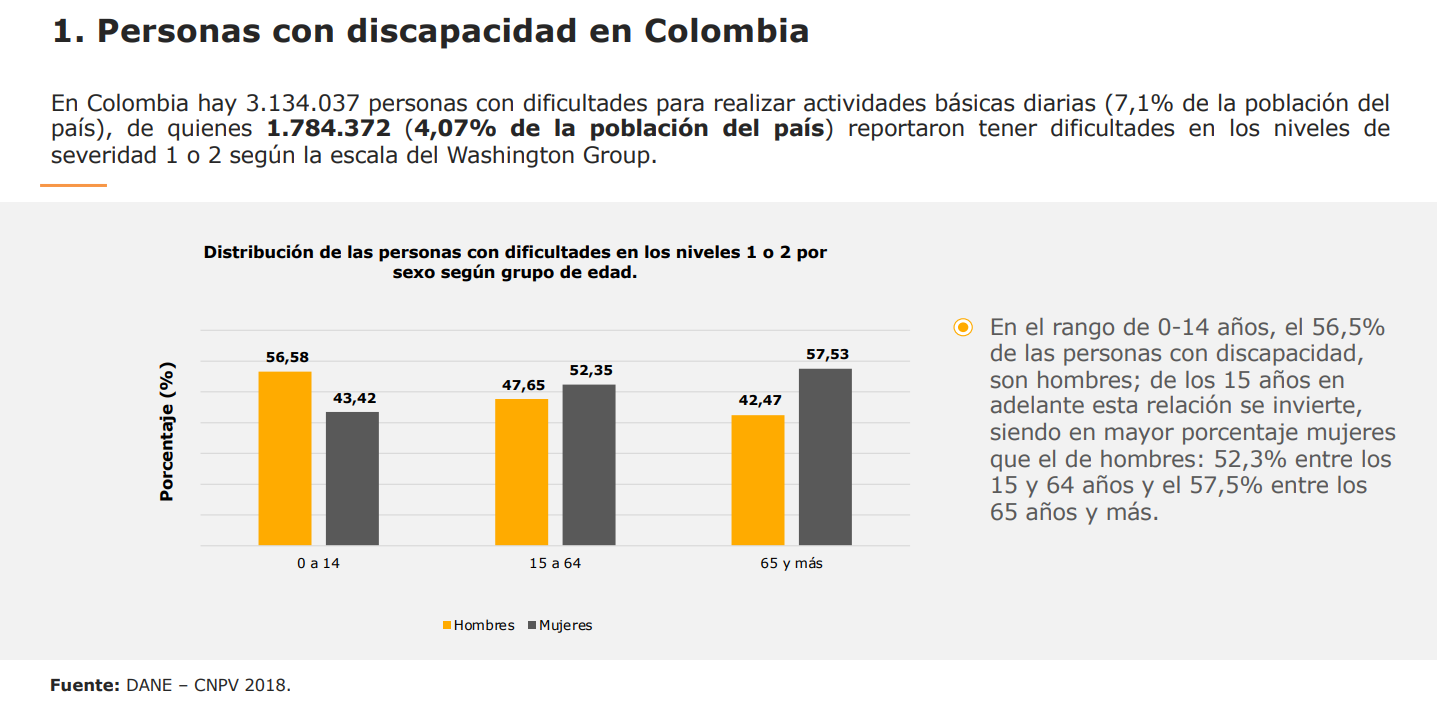
Se necesita adecuar las exigencias programáticas a las capacidades de los estudiantes, respetando el ritmo propio de aprendizaje. De esta forma, debe proveerse de manera oportuna, el desarrollo de estrategias cognitivas, considerando el desarrollo de las destrezas básicas, la velocidad para aprender y la motivación que tengan los niños, niñas y adolescentes (Álvarez & Conde-Guzón, 2009). La atención que se reciba debe estar basada en estrategias didácticas y pedagógicas, permitiendo realizar los ajustes que cada uno de estos estudiantes requiere para su aprendizaje y evaluación.

Vale la pena anotar, que es difícil en algunos casos señalar de manera estricta si la dificultad responde a un cuadro de dificultad general o específico, ya que presentan características de ambas categorías. Del mismo modo, hay estudiantes que manifiestan dificultades generales asociándose a un trastorno específico (Ceril, 2003:1). No obstante, como lo identifica el MEN (2018b), los docentes al garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, deben estar facultados para identificar al estudiante con dificultades de aprendizaje, y el nivel de la dificultad de aprendizaje.

El docente que es calificado por el MEN como “Profesional de apoyo pedagógico “, debe contar con la formación y competencias profesionales para entender que los niños con problemas de aprendizaje en muchos casos pueden ser atendidos por ellos mismos, sin tener que recurrir a un especialista por fuera del ámbito educacional. Se requieren profesionales en pedagogía que asuman el rol de formador integral, asumiendo ritmos de aprendizaje diferentes. Como bien lo expone el MEN (2018a) deben realizarse ajustes razonables a través de prácticas pedagógicas con un enfoque diferencial respondiendo a las habilidades y capacidades de cada estudiante.

Igualmente, dentro de la articulación necesaria entre el MEN y Ministerio de Salud y Protección Social, es fundamental el diagnóstico de profesionales especializados, práctica actualmente no establecida, (entendiendo que son profesionales que ya hacen parte del sistema de salud estatal, por lo que ni el MEN, ni las instituciones educativas incurrirán en ningún costo adicional), ya que permitirá “identificar el nivel de aprendizaje con el nivel de desarrollo de cada niño, determinar subtipos de niños con dificultades de aprendizaje, ayudando a entender los problemas individuales y en muchos casos planificando estrategias de intervención” (Cabrera, 2017). La evaluación diagnóstica interdisciplinar y el trabajo colaborativo entre pares, a través del desarrollo de estrategias de observaciones en el aula, permitirían identificar posibles alertas, ayudando a distinguir estudiantes con dificultades de aprendizaje de un modo más detallado y a desarrollar planes específicos de tratamiento desde la perspectiva neuropsicológica, cognitiva y del comportamiento.

**8.4 Estadística de la población con discapacidad en Colombia.**

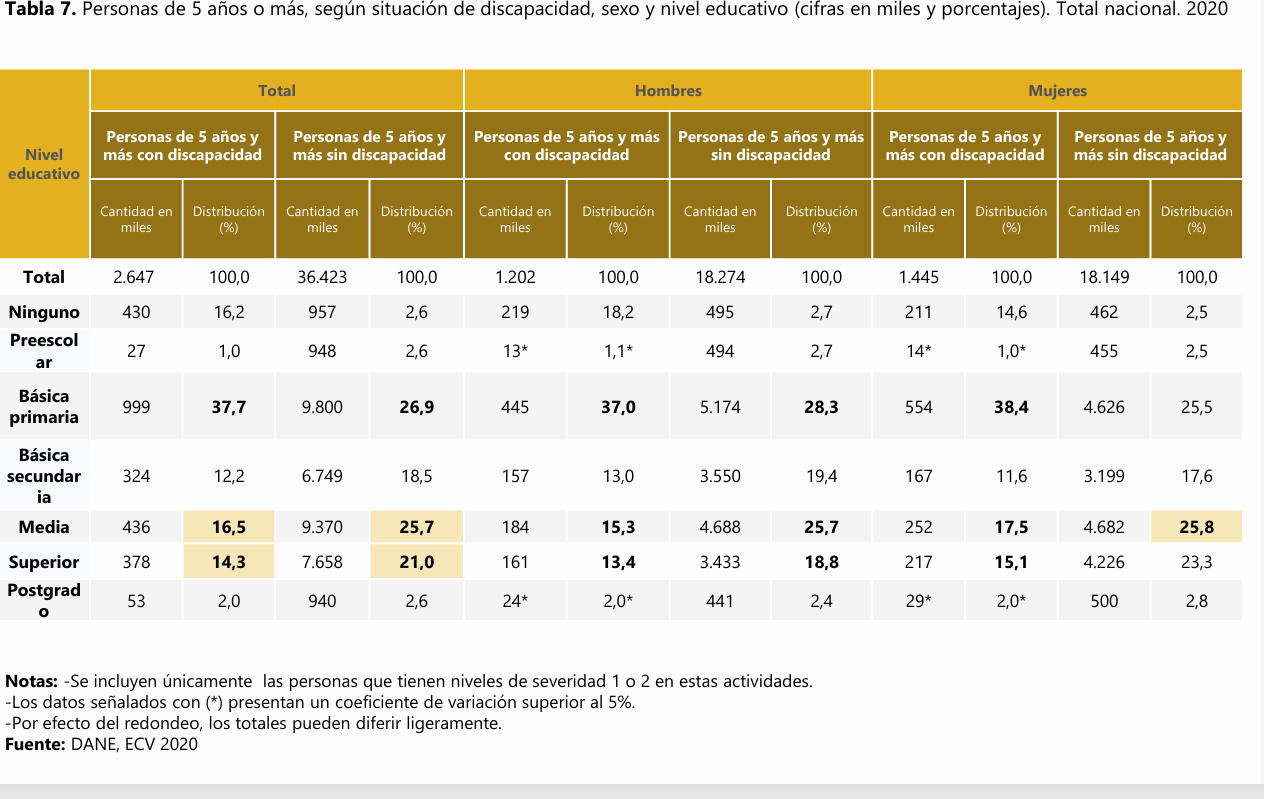


1. Distribución según Edad y sexo Dentro de la población con discapacidad registrada, se encuentra un porcentaje mayor de mujeres (48,9%) con respecto a los hombres (50,1%).

2. Según el grupo etario las personas con discapacidad registradas son en su mayoría adultos mayores 39%.

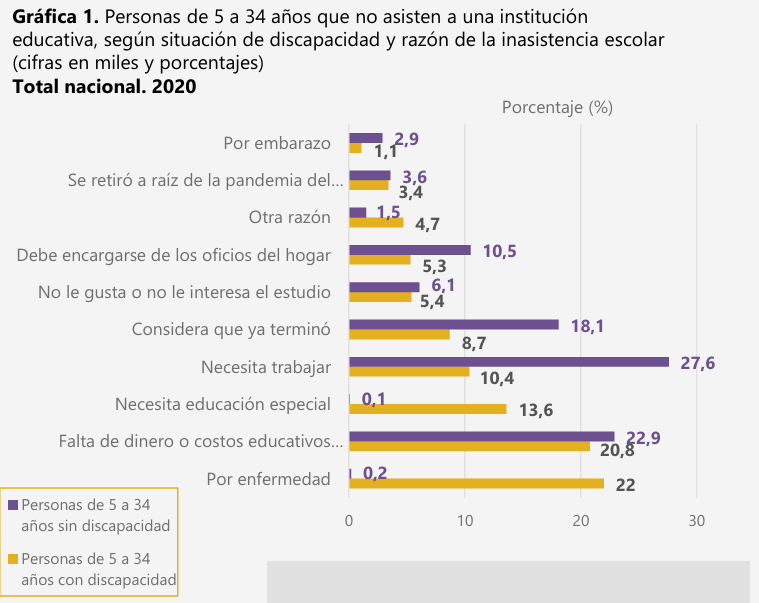
3. Los adultos representan el 37%, mientras que los jóvenes y las niñas y niños el 15% y el 8% respectivamente.

4. Los grupos etarios utilizados corresponden a niñas, niños adolescentes (0 a 14 años); jóvenes (15 a 27 años).



Las mayores brechas del nivel educativo entre la población con y sin discapacidad, se registran entre quienes no tienen ningún nivel educativo y en los niveles básica primaria y media:

1. 16,2% de las personas en situación de discapacidad no tiene ningún nivel educativo.
2. El 37,7% de las personas con discapacidad tienen educación básica primaria,
3. El 16,5% de personas con discapacidad con tienen educación media)



**Fuente**: DANE, ECV 2020

La inasistencia escolar de las personas en condición de discapacidad se refleja en variables con incidencias familiares, sociales, económicas , de salubridad entre otras.

1. En promedio el 22 % no asisten por motivos de salud.
2. En promedio el 20,8 no asisten por falta de recursos económicos.
3. En promedio el 6% no asiste por que no le interesa.
4. En promedio el 13,6% necesita educación especial.

**8.5 Programas activos de educación especial en Colombia**:

1. Programa de intervención en lenguaje para el aprendizaje significativo.

El Centro de Comunicación Humana de la Universidad Nacional (CCH) (2018), ha identificado que “en un salón con 40 niños, el 20% tiene dificultades de aprendizaje no asociadas a un trastorno, pero solo el 15% recibe ayuda”. Este centro ofrece talleres “Pilas” a niños entre los 9 y 12 años, con los cuales se enfatiza la interacción con el lenguaje a través del aprendizaje significativo (CCH, 2018). Las características principales que atiende el taller, son la dificultad en concentrar la atención durante períodos prolongados de tiempo, hasta la parte motivacional y emocional.

El Centro de Comunicación Humana de la Universidad Nacional asegura, que niños que han participado en los talleres “Pilas” “han mejorado considerablemente su rendimiento académico y su velocidad de respuesta, así como sus niveles de atención, según reporte de los mismos docentes que los remiten” (2018).

1. Aula especial María luisa en el Municipio de Silvia (Cauca).

Con respecto al tema de inclusión educativa y social de la población con discapacidad, en el plan de gobierno 2016- 2019 del municipio se menciona lo siguiente: “El Municipio de Silvia cuenta con un comité de Discapacidad Activo, así mismo se ha avanzado en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en conjunto con las tres IPS: Totoguampa, Mama Dominga, ESE Centro Uno, la Fundación Liliane Fonds y la Fundación Semillas de Esperanza.

En conjunto con esta última se han logrado entregar ayudas técnicas, siendo necesaria la formulación de la Política Pública para la población en situación de Discapacidad. En el Centro Docente San Pedro funciona el aula especial Mariluisa que atiende la educación para niños y niñas en situación de discapacidad, además desde allí se realiza acompañamiento a las demás Instituciones y Centros Educativos del Municipio, en educación para población escolarizada en situación de discapacidad.

Iimportante para resaltar, que el municipio de Silvia aprobó a finales del año 2019 su Política Pública para la Población en condición de discapacidad hasta el año 2029, propuesto en el Plan de Desarrollo, se puede evidenciar el compromiso de la población y de la administración pública en pro del mejoramiento de la atención a la población con discapacidad del municipio.

1. Dinámicas de juego en el Colegio Alemán de Cali.

La terapia ocupacional ha centrado su trabajo en los aspectos relacionados con las áreas ocupacionales propias del escolar. Lo anterior vinculando las acciones de los terapeutas ocupacionales en las actividades del desarrollo de actividades escolares como aporte para la consecución de los objetivos institucionales a largo plazo.

Las acciones centradas en el contexto y la actividad están directamente relacionadas con la respuesta educativa. En la medida en que el colegio distinguió dos tipos de formación durante la etapa escolar, la que le brinda la familia y la que ofrece la escuela, los terapeutas tienen la facultad de determinar si los recursos, en cuanto a la buena organización de hábitos y rutinas escolares, que ofrece la escuela y la familia son efectivos y consecuentes con los que necesita para afrontar las demandas que se le asignan (Cardozo, 2014:7). Lo anterior permite identificar factores y herramientas propositivas para enfrentar barreras para el aprendizaje.

Entre los mayores logros de la presencia de la terapia ocupacional en más de 11 años, se pueden evidenciar, en primer lugar, la superación de la visión de la terapia ocupacional como servicio anexo a la escuela, incorporándose a los procesos misionales de la estructura institucional, instaurándose como un apoyo al docente y posicionándose como parte activa del proceso de apoyo interno al escolar y a su familia (Cardozo, 2014). En segundo lugar, “las movilizaciones que se han realizado, en conjunto con el equipo pedagógico para ampliar la mirada acerca del carácter bidireccional de los problemas de desempeño escolar de los estudiantes, donde además de analizar los factores propios del sujeto, se admite la reflexión acerca de la influencias positiva o negativa que los procesos de enseñanza- aprendizaje, los factores familiares y del entorno social, potenciando de esta manera el diseño de los apoyos necesarios desde el contexto escolar” (Cardozo, 2014:2).

1. Diagnóstico interdisciplinar en la Institución Educativa San Juan Bosco, Centro Educativo Rural San José de Castro y la Institución Educativa Antonio José de Sucre, en el Municipio de Arboledas.

Se ejecutó aplicación de pruebas estandarizadas para medir las habilidades necesarias en el desempeño escolar de los estudiantes en los grados de preescolar, primero, segundo y tercero de primaria en la Institución Educativa San Juan Bosco, Centro Educativo Rural San José de Castro y la Institución Educativa Antonio José de Sucre. El diagnóstico consistió en la atención sostenida, en primer lugar, a partir de la implementación de mecanismos con el fin de mantener el foco de atención y permanecer alerta durante tareas **cognitivas. En segundo lugar, identificando causales** de procesamiento de toda la información recibida, y demandas del ambiente útiles o importantes. En tercer lugar, se proyectó la capacidad selectiva para dar respuesta ante las múltiples demandas del ambiente.

En el diagnóstico expuesto por los docentes y terapeutas ocupacionales se encontraron problemas de atención no unitaria, identificándose déficit en cuanto a la integración visomotora, entendiéndola como la capacidad que tiene el ser humano para utilizar simultáneamente y de forma integrada, la vista y las manos con el propósito de realizar una actividad. En segundo lugar, la carencia en la percepción visual, reconociendo la aptitud para entender o interpretar lo que se ve, comprendiendo el significado de símbolos, palabras escritas o dibujos (López et al, 2008). Y por último, la coordinación motriz, la cual se define como “la capacidad de realizar ejercicios con la mano de acuerdo a lo que se ve” (Ardanaz, 2009).

**9.MARCO LEGAL**

El presente proyecto de ley tiene sustento en los siguientes enunciados constitucionales, jurisprudenciales y legales, y referencias de tratados y convenios internacionales.

**9.1 Instrumentos Jurídicos internacionales**

1. Declaración de los derechos de las personas con retardo mental de 1971 (Asamblea general de la ONU).
2. Declaración de los derechos de los impedidos de 1975 (Asamblea general de la ONU).
3. Clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías (CIDDM) de 1980 (Grupo evaluación, calificación y epidemiologia de la OMS, 1999.
4. Programa de acción mundial para las personas con discapacidad de 1982 (Asamblea general de la ONU).
5. Normas uniformes sobre la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993 (Asamblea general de la ONU).
6. Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) de 2001 (Organización mundial de la salud, 2001).
7. Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 2001 (Organización de los estados americanos).
8. Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 (Organización de las naciones unidas).

**9.2 Fundamentos constitucionales**

**Artículo 13 de la Constitución Política** plantea que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".

**Artículo 67 de la Constitución Política:** dispone que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, en cual el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

**Artículo 44 de la Constitución Política** define los derechos fundamentales de los niños, y en ese sentido establece que "(...) la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

**Artículo 47 de la Carta Política** prescribe que "el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran", y en el artículo 68 se señala que "la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado".

**Ley 115 de 1994**, de manera particular el artículo 46, establece que"la educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo".

**Ley 1098 de 2006,** Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás. En segundo lugar.

**Ley 1618 de 2013**, ordena a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva. El artículo 11 de la Ley estatutaria en cita ordenó al Ministerio de Educación Nacional reglamentar "(...) el esquema de atención educativa a la población con discapacidad, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo".

**Ley Estatutaria 1618 de 2013**, también le atribuye un enfoque inclusivo a la educación superior, de ahí que el Ministerio de Educación Nacional deba adoptar criterios de inclusión educativa desde la educación básica y media. Igualmente, por mandato de la Ley 1188 de 2008, las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, están llamadas a "aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población". Lo anterior, se instaura como lineamientos bajo los cuales deberían garantizarse la inclusión igualmente en la educación preescolar, básica y media.

Ley 1618 de 2013 demanda al sector educativo reglamentar aspectos relacionados con la educación inclusiva de las personas con discapacidad, en el sentido de procurar acciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en todos los niveles de formación, lo que implica ajustar el Decreto número 1075 de 2015 al marco normativo dispuesto en esta ley y en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada mediante la Ley 1346 de 2009.

**Decreto número 1075 de 2015** se compilan y racionalizan las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo. En las Secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto número 1075 de 2015, se organiza el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades territoriales certificadas en educación para atender los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.

**Decreto 1421 del 2017** mediante el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva y la atención educativa a la población en condición de discapacidad.

**7.3 Fuentes jurisprudenciales**

La Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de educación "segregada" o "integrada" a una educación inclusiva que "(...) persigue que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos", pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca ahora es que "la enseñanza se adapte a los estudiantes y no estos a la enseñanza", según lo indicado en la Sentencia T- 051 de 2011.

Igualmente en Sentencia C-824 del 2011 determina “(…) existe un deber constitucional de protección fundado en las condiciones singulares de vulnerabilidad y eventualmente de desprotección, que hace que tal población requiera de atención especial por parte del estado y la sociedad en general(…)”.

Ratifica en Sentencia C-606 de 2012 "(...) este deber constitucional de protección está cualificado por las obligaciones del estado colombiano adquiridas con la celebración de tratados internacionales y por obligaciones especiales recogidas en disposiciones legales y reglamentarias (…)”.

En razón a lo anterior, el Estado Colombiano busca consolidar procesos con los cuales se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales indicados en precedencia, los tratados internacionales y la legislación nacional, en particular las Leyes 361 de 1997, 762 de 2002, 1145 de 2007, 1346 de 2009, 1616 de 2013 y 1618 de 2013, que imponen de manera imprescindible la corresponsabilidad de la autoridades públicas, las instituciones educativas y, primordialmente, la familia.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Colombia ha expedido lineamientos normativos, en donde se prioriza la educación como un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes. No obstante, no se contempla de manera precisa a los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje. Por tanto, el presente Proyecto de Ley pretende visibilizar una problemática no expuesta, planteando lineamientos bajo los cuales se garantizará la inclusión estudiantil soportada en los derechos humanos y en la educación de calidad.

## 10.IMPACTO FISCAL

El parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política, la regla fiscal no puede aplicarse de manera tal que se menoscaben los derechos fundamentales, se restrinja su alcance o se niegue su protección efectiva. Se trata de un imperativo que subordina toda decisión a la imposibilidad de afectar el goce efectivo de los citados derechos constitucionales. Por ello, en forma categórica, el inciso 4 del artículo 1 del Acto Legislativo No. 03 de 2011, dispone que: “En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales”.

Pese a lo anterior, en el marco del trámite legislativo correspondiente se requerirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se pronuncie en lo correspondiente.

## 11.CONFLICTO DE INTERÉS

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 es pertinente señalar que según lo dispuesto por el artículo 286 del Reglamento del Congreso se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo.

La precitada norma establece las siguientes definiciones:

* 1. *“Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*
  2. *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*
  3. *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”*

En ese sentido, se estima que de la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley podría generarse un conflicto de interés en consideración al interés particular, actual y directo de los

congresistas, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero se encuentren incursos en las siguientes situaciones:

* + Tener a su cargo una persona con discapacidad.
  + Ser una persona con discapacidad que requiera del cuidado de una persona.
  + Que alguno de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil tenga a su cuidado una persona con discapacidad.
  + Que alguno de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil sea una persona con discapacidad que requiera del cuidado de una persona.

En esta medida, si algún Congresista concluye que está inmerso en alguna de estas posibles causales o considera que existe otra circunstancia por la cual deba declararse impedido para la discusión y votación de este Proyecto de Ley deberá presentar su impedimento de forma oportuna y por escrito para que el Presidente pueda ponerlo a consideración.

Finalmente, se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto por la Ley 5ta no exime al Congresista de identificar causales o situaciones adicionales.

Cordialmente,

Gerardo Yepes Caro.

Representante a la Cámara.

1. [↑](#footnote-ref-1)